



## **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD**

Medellín, trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

<b>REFERENCIA</b>	ACCIÓN DE TUTELA
<b>ACCIONANTE</b>	DORIS MARÍA LARA
<b>ACCIONADA</b>	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
<b>RADICADO</b>	05001 40 03 <b>012 2023 00082 01</b>
<b>ASUNTO</b>	<b>DECRETA NULIDAD</b>

### **I. ANTECEDENTES**

Dentro de la acción de tutela promovida por la señora DORIS MARÍA LARA, contra LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, el Juzgado Doce (12) Civil Municipal de Oralidad de Medellín profirió sentencia el 3 de febrero de 2023, en la que denegó el amparo constitucional solicitado por improcedente. Dicha providencia fue impugnada por la accionante, motivo este por el cual se encuentra en este Despacho la presente diligencia.

Sería del caso avocar conocimiento del asunto para emitir el fallo de segunda instancia que en derecho corresponde, sino fuera porque se advierte una irregularidad en la actuación que resulta configurativa de nulidad, la cual debe ser declarada de oficio.

### **II. CONSIDERACIONES**

El derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías fundamentales, de acuerdo con las cuales nadie puede ser juzgado o investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, destacándose entre ellas el derecho de aducir pruebas y controvertir las allegadas en su contra, garantías que por su cardinal importancia están consagradas como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política.

También se tiene dicho que la acción de tutela es un mecanismo judicial efectivo de defensa de los derechos superiores que, no obstante, caracterizarse por los

principios de brevedad y sumariidad, no es ajena a las reglas del debido proceso; de esas reglas se destaca la obligación de notificar no solo su formulación, sino también la decisión de fondo a quienes figuren como accionados y vinculados.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en providencia A193-16, expresó:

1. La acción de tutela es un mecanismo constitucional para la defensa de los derechos fundamentales de los asociados, que se tramita con una particular celeridad e informalidad, de cara a la necesidad de contener con urgencia el desconocimiento de aquellos. No obstante, la informalidad en la interposición y en el trámite de la acción, como una vía para que este recurso judicial sea accesible a cualquier persona, es imperioso respetar y resguardar el derecho al debido proceso de quienes tienen interés legítimo en la causa, de tal forma que la determinación que se adopte en el caso concreto, sea el producto del diálogo entre las posiciones de derecho de quienes se verían afectados con la decisión judicial del juez constitucional.

2. El ejercicio del derecho de defensa en un proceso judicial, entre ellos el que admite una acción de tutela, depende del conocimiento que los sujetos interesados tengan sobre el mismo.  
(...)

La oportunidad para advertir este tipo de nulidad en forma oficiosa no fenece, pues como lo estableció el Legislador en el artículo 137 del Código General de Proceso, el juez está facultado para reconocerla en cualquier etapa procesal y obligado a poner en conocimiento del afectado la situación, notificarlo de la existencia de la irregularidad y darle el término de 3 días para que la alegue en su favor, o desista de hacerlo. En caso de no formularla, la nulidad queda saneada y el trámite seguirá su curso.

En sentencia T-025 de 2018, la Corte Constitucional expuso:

### ***La indebida notificación como defecto procedimental***

1. Esta Corporación ha reconocido la importancia que tiene la notificación en los procesos judiciales. En particular, la **sentencia C-670 de 2004**<sup>1</sup> resaltó lo siguiente:

***"[L]a Corte ha mantenido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de que la notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la***

---

<sup>1</sup> M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

*vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, así como que es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales.* (Negrilla fuera del texto original).

En el mismo sentido se pronunció la Sala Plena en la **sentencia C-783 de 2004**<sup>2</sup>, en la que indicó que la notificación judicial es el acto procesal por medio del cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros las decisiones adoptadas por el juez. En consecuencia, tal actuación constituye un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la función jurisdiccional establecido en el artículo 228 de la Norma Superior.

**La notificación judicial constituye un elemento básico del derecho fundamental al debido proceso, pues a través de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que no estén de acuerdo y de esta forma ejercer su derecho de defensa.** (Negrilla del Juzgado).

Así pues, resulta pacífico entender que el trámite de la acción de tutela debe ceñirse al debido proceso como cualquier otra actuación judicial, tornándose entonces indispensable, notificar tanto su iniciación como la decisión que de fondo se adopte.

El derecho de defensa y la posibilidad de ejercer la contradicción dentro del respectivo procedimiento son dos componentes destacados del debido proceso y para asegurar su garantía se requiere de la notificación de las providencias emitidas dentro del proceso que, adicionalmente, es una de las manifestaciones del principio de publicidad procesal.

De lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, se desprende que todas las providencias proferidas dentro del trámite de amparo constitucional deben ser notificadas a las partes o a quienes intervengan en él, siendo el juez el llamado a velar por el aseguramiento de la eficacia de la notificación, atendiendo a las circunstancias, al medio empleado y a la oportunidad.

Tratándose de las partes, los artículos 10 y 13 del Decreto referenciado, indican que lo son, de un lado, el interesado *-persona que presenta la acción-*, y de otro, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la tutela, siendo

---

<sup>2</sup> M.P. Jaime Araujo Rentería.

precisamente esta, en cuanto sujeto pasivo, la que debe ser notificada por el medio que el juez considere más expedito y eficaz, como lo dispone el Decreto citado.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional también ha reiterado en muchos de sus pronunciamientos que la acción de tutela debe notificarse a los terceros que podrían resultar afectados por la decisión del juez correspondiente.

Esta posición reconoce que, aunque no existe norma legal que lo ordene expresamente, la interpretación armónica de las normas que regulan la acción de tutela, indica que la notificación del proceso a personas que podrían resultar afectadas por la decisión es un requerimiento para la validez del mismo, ya que determina la protección integral de los derechos fundamentales involucrados en el litigio.

La Corte Constitucional ha concluido que la falta de notificación de la acción de tutela a personas que podrían resultar afectadas por la decisión, genera una violación del debido proceso, una afectación del derecho de defensa y una deficiencia de protección de los derechos fundamentales involucrados que deriva en la nulidad del proceso de tutela. De ahí que, si el juez constitucional advierte que no se ha integrado en debida forma el contradictorio por parte pasiva, será él quien asuma esa carga procesal y, en consecuencia, vinculará oficiosamente a las partes e intervinientes al trámite de dicha acción de tutela, asegurándose de esta forma el pleno ejercicio del derecho de defensa por cuenta de todos los intervinientes en el proceso y, la posibilidad de proferir un fallo con plena capacidad para proteger los derechos fundamentales invocados por el accionante como violados.

En el mismo sentido, resulta imperioso puntualizar que, conforme lo previsto en el inciso 2° del numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de la acción de tutela, “cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que depende de dicha providencia (...)”.

### III. CASO CONCRETO

En el caso bajo estudio, la señora DORIS MARÍA LARA instauró acción de tutela en contra de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, por la presunta vulneración de sus derechos, al no ser exonerada del pago del impuesto vehicular con relación al automotor de placas CAP 684, aunque este fue hurtado desde el 11 de agosto de 2008.

Cabe precisar que, tanto de los anexos del escrito tutelar, como de la contestación a este amparo, se avizora que la accionada no es la entidad llamada a resolver la petición de la parte actora, en tanto no tiene competencia para ello; este caso le corresponde resolverlo a la Unidad de Cobro Coactivo - Área de Tesorería de la Gobernación de Antioquia, y a la Secretaría de Movilidad del municipio de Bello, de acuerdo a la Resolución N°. 2022060011149 del 28 de abril de 2022.

Sin embargo, como aquellas no fueron vinculadas a este trámite, no tuvieron la oportunidad de pronunciarse frente a los hechos que dieron origen a este amparo y, por ende, a ejercer el derecho de defensa y contradicción.

Así las cosas, con el fin de corregir la irregularidad advertida, este Despacho de conformidad con la jurisprudencia constitucional antes reseñada, y a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 (reglamentario de la acción de tutela), en armonía con lo normado en el inciso 2° del numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, procederá a declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela, inclusive; a fin de que se vincule al trámite a la Unidad de Cobro Coactivo - Área de Tesorería de la Gobernación de Antioquia, y a la Secretaría de Movilidad del municipio de Bello.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN,**

#### RESUELVE

**PRIMERO. DECRETAR LA NULIDAD** de lo actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela, inclusive; a fin de que se vincule al trámite a la Unidad de Cobro Coactivo - Área de Tesorería de la Gobernación de Antioquia, y a la Secretaría de Movilidad del municipio de Bello; conforme a lo dicho en la parte motiva.

**SEGUNDO. NOTIFICAR** a quienes concierne el contenido de esta providencia por el medio más expedito y eficaz.

**TERCERO. DEVOLVER** el expediente al juzgado de origen, para los efectos señalados en esta decisión.

## NOTIFÍQUESE

2.

### BEATRIZ ELENA GUTIÉRREZ CORREA JUEZ

#### JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN

Se notifica el presente auto por **Estados Electrónicos** Nro. 019

Fijado hoy en la página de la rama judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/>

Medellín 14 de febrero de 2023

**YESSICA ANDREA LASSO PARRA  
SECRETARIA**

Firmado Por:

**Beatriz Elena Gutierrez Correa**

**Juez Circuito**

**Juzgado De Circuito**

**Civil 002**

**Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e74f141f58c824e79915197e22557f8a1d0411112ed6afdb0e8135e151021016**

Documento generado en 13/02/2023 02:23:01 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**